



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**

---

<b>REFERENCIA</b>	:	<b>ACCION DE TUTELA</b>
<b>RADICADO</b>	:	<b>13688-40-89-001-2023-00460-00</b>
<b>ACCIONANTE</b>	:	<b>JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA</b>
<b>ACCIONADO</b>	:	<b>SAN LUQUITAS GOLD SAS</b>

---

Santa Rosa del Sur, once (11) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

**ASUNTO**

Resuelve el Despacho la Acción Constitucional interpuesta por el señor JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA a través de vocero judicial en contra de SAN LUQUITAS GOLD S.A.S., en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 86° de la Constitución Política de Colombia y los Decretos Reglamentarios 2591 de 1991 y 306 de 1992.

**PRESUPUESTO FACTICO**

Indicó el apoderado judicial del accionante que su prohijado es empleado activo de la empresa SAN LUQUITAS GOLD SAS, identificada con el NIT. 901582177-1, vinculado a través de contrato verbal a término indefinido realizado por el señor EDINSON OLARTE CASTILLO identificado con cedula de ciudadanía número 18.926.953, iniciando sus labores el día seis (06) de febrero del año 2023, con la finalidad de trabajar en la sede operativa de dicha empresa ubicada en el corregimiento de San Pedro Frio, en la vereda San Luquitas, jurisdicción de esta municipalidad.

Indica, que desde su vinculación desempeñó las siguientes funciones:

1. Extracción de material
2. Excavación en tierra y roca
3. Realizar avance en Roca y carbón
4. Llenar coche
5. Perforar Roca
6. Manipulación de explosivos

El horario asignado a JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA fue el siguiente:

- a. Los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
- b. Con hora de entrada a las 6:00 a.m. y de salida a las 6:00pm o hasta la hora que lo necesitaran.

Se Pactó el salario en la suma de \$90.000 pesos diarios, es decir, un aproximado de \$2.700.000 mensuales, suma pagadera en efectivo, entregada por el señor EDINSON OLARTE CASTILLO.

Para el desarrollo de sus funciones, la accionada suministraba todos los insumos, herramientas, materiales de trabajo necesarios para cumplir con las labores contratadas.

Acota el accionante que a su prohijado no se le brindó capacitación según el Sistema integrado de seguridad y salud en el trabajo, contenido en el decreto 1072 de 2015, y en consecuencia, no se le brindaron los elementos de protección personal por parte del empleador como son:

- a. Casco de seguridad con cintas reflectantes y barboquejo.
- b. Lámpara minera en casco.
- c. Lentes de seguridad
- d. Respirador con filtros mixtos
- e. Buzo o chaleco con cintas reflectares
- f. Guantes de seguridad vaqueta reforzado
- g. Auto rescatador
- h. Cinturón de seguridad
- i. Calzado o botas de seguridad

Arguye que el señor JUAN DANIEL VILLABONA recibió continuada subordinación o dependencia por parte de su empleador, SAN LUQUITAS GOLD SAS, al respecto el trabajador:

- a. Debía cumplir con el horario estipulado o quedarse cuando era extendido.
- b. Debía cumplir con las tareas encomendadas.
- c. Asistir a laborar en la sede operativa de la empresa.
- d. Recibía supervisión de sus labores por parte de su empleador o de sus representantes.
- e. Debía mantener el orden y limpieza en su lugar de trabajo.
- f. Debía acatar todas las órdenes e instrucciones impartidas por EDINSON OLARTE CASTILLO, o alguna otra persona designada por el representante legal.

Pese a lo anterior, indica que su poderdante no fue vinculado o afiliado al Sistema de Seguridad Social integral, y que el día veintiuno (21) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), mientras JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA desempeñaba labores para la empresa SAN LUQUITAS GOLD SAS en el corregimiento San Pedro Frio, Vereda San Luquitas, perteneciente al municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, sufrió accidente de trabajo, producto de atropellamiento por parte de un vagón minero (carro tipo Gramby) cargado de material rocoso, generándole distintas afectaciones físicas.

Que el señor JUAN DANIEL VILLABONA fue trasladado y atendido por emergencia ambulatoria, en el hospital San Antonio de Padua en Simití, departamento de Bolívar., no obstante, al no contar con afiliación Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales, fue coaccionado por su jefe inmediato, el señor EDINSON OLARTE CASTILLO, para que manifestara en el centro de salud, que había sufrido un accidente de tránsito.

Adiciona que JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA, el día del accidente fue acompañado por su cónyuge, y por su jefe inmediato el señor EDINSON OLARTE CASTILLO, quien en

ese momento manifestó que era quien conducía la motocicleta (En la cual ocurrió el supuesto accidente), Yamaha XTZ250, modelo 2021, color blanco y negro, placa SPA34F, que es propiedad de CRISTIAN ADRIAN PEREZ SANABRIA, identificado con la cedula de ciudadanía No 1.002.279.499, expedida en girón.

JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA, ingreso al hospital San Antonio de Pauda en Simití, supuestamente *“como pasajero de una motocicleta, quien sufrió accidente hace 12 horas, por caída de motocicleta en movimiento, cayendo de espaldas sobre una roca, presenta dolor de alta intensidad en dorso, dolor a la inspiración astenia, no tolera estar de pie o en cubito dorsal por el agudo dolor, limitación a la marcha”*.

En el centro de salud le encontraron los siguientes hallazgos de diagnóstico: (V285) MOTOCICLISTA (PASAJERO) LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE SIN COLISION; (S202) CONTUSION DE TORAX; (M546) DOLOR EN LA COLUMNA DORSAL. (S335) ESGUINCE Y TORCEDURA DE LA COLUMNA LUMBAR.

Las diferentes patologías han deteriorado de manera considerable la calidad de vida de JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA, al extremo de verse afectada su movilidad. Es así como el día tres (03) de abril del año 2023, fue valorado con especialista particular en la empresa privada ESCANOGRAFIA S.A. de la ciudad de Bucaramanga, por el especialista en radiología e imágenes diagnósticas, Dr. JUAN CARLOS MANTILLA SUAREZ, que, como resultado de la valoración, diagnostico en nuestro representado; una disminución en la altura y la intensidad de la señal de los discos intervertebrales L4 - L5 y L5 - S1.

Producto de las secuelas causadas por el accidente laboral, JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA ha necesitado acudir de manera constante a consultas programadas con diferentes especialidades médicas, generando múltiples incapacidades médicas, las cuales ascendieron a más de ciento noventa y cinco (195) días, comprendidas entre el veinticinco (25) de febrero hasta el catorce (14) de septiembre del año 2023. A pesar de que la empresa SAN LUQUITAS GOLD SAS, siempre ha sido informada de la evolución del actor, los mismos no han solicitado la valoración medico ocupacional.

El día diez (10) de marzo del año 2023, la empresa SAN LUQUITAS GOLD SAS, por medio del jefe inmediato, el señor EDINSON OLARTE CASTILLO le comunica verbalmente al actor la decisión de finalizar el vínculo laboral, indicándole que en razón a su condición física producto del accidente no podría tenerlo más trabajando. Dejando ver de forma clara un actuar inhumano, indolente y arbitrario hacia la salud y la vida digna de JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA; obviando que este se encuentra amparado por el fuero de estabilidad ocupacional reforzada, que le permite protección en la estabilidad laboral.

Que la empresa SAN LUQUITAS GOLD SAS, al no poder despedir al actor, de manera arbitraria decide, por medio de su representante legal suplente el señor FABIO JOAN URIBE TELLEZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 91.489.359, acercarse a nuestro representado ofreciendo un contrato de transacción con la mala fe de desconocer derechos ciertos e indiscutibles que amparan a JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA.

En el precitado contrato de transacción la empresa SAN LUQUITAS GOLD SAS, intenta desdibujar la relación laboral denominándose ellos mismos como “EL OBLIGADO SOLIDARIO”, en esta prueba documental afirman, en el acápite CONSIDERACIONES

literal D, “que el 21 de febrero de 2023, JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA sufrió un accidente en la sede operativa de SAN LUQUITAS GOLD SAS”.

Que desde la ocurrencia del accidente, la salud del accionante ha mermado progresivamente, viéndose en la imperiosa necesidad de acudir a médicos especialistas en ortopedia y traumatología, gastos en los que ha incurrido de forma particular y que afectan su economía, generándose incapacidades prolongadas desde el día 25 de febrero de 2023 hasta el día 16 de septiembre de 2023, sin embargo, la accionada SAN LUQUITAS GOLD S.A.S. únicamente pagó incapacidades hasta el día 15 de julio de 2023.

El día veintitrés (23) de agosto del presente año, se reunieron los empleadores, GILDARDO CAMACHO, BERTILDE QUIROGA, EDINSON OLARTE Y VANESSA AREVALO con el señor JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA, con el fin de pagar las incapacidades generadas hasta la fecha cancelando un total de siete millones cuatrocientos mil pesos (7.400.000) y debiendo un total de dos millones doscientos mil pesos (2.200.000).

Indica que el daño causado por el accidente laboral fue de tal magnitud, que no solamente ha afectado la salud mental y física, sino que ha afectado todos los ámbitos de la vida de su prohijado y de la vida de los miembros de su familia.

JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA, no cuenta con vivienda propia, ni tampoco reside en vivienda familiar, por lo tanto, paga arriendo. No tiene una profesión definida, adicional a desempeñarse como ayudante frentero, no realiza ninguna otra actividad, por lo tanto, no le genera ningún otro ingreso suficiente para el sostenimiento. Vive en unión libre, es progenitor de (02) hijos menores de edad, que dependen exclusivamente de él, además depende económicamente de él su compañera sentimental DARLY YULIANA ALARCON RINCON identificada con la cedula de ciudadanía número 1.002.279.039, quien no recibe salario ni pensión alguna, tampoco posee propiedades, y es madre de una niña de cuatro (04) años de edad, quien también depende exclusivamente del señor VILLABONA BECERRA pues es su padre de crianza.

Por lo anterior, la ruptura laboral afecta contundentemente su derecho al mínimo vital, teniendo en cuenta que por su estado actual de salud no ha podido laborar. Adicionalmente, con el actuar de SAN LUQUITAS GOLD SAS., no solo se ve afectado su derecho a gozar de Seguridad Social, sino que dicha afectación se extiende a su compañera permanente e hijos.

## **PRETENSIONES**

Conforme lo relatado, el accionante solicitó el amparo por vía de tutela de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad humana, estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y móvil, al trabajo y al debido proceso del señor JUAN DANIEL VILLABONA y en consecuencia se declare la ineficacia de la terminación del contrato o del despido laboral, ordenándole a la empresa SAN LUQUITAS GOLD SAS.

1. El reintegro laboral de JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA., mediante contrato a término indefinido a su cargo o a uno de superior jerarquía.
2. Realice el respectivo estudio de puesto de trabajo y en caso de considerarlo se le reubique a un cargo que ofrezca condiciones similares a las del empleo desempeñado hasta

su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado de salud, sino que esté acorde con su situación.

3. Proceder a pagar los salarios que dejó de percibir desde el veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023) hasta el momento de su reintegro.

4. Proceder a cancelar una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de salario, teniendo en cuenta la remuneración que devengaba en el momento que fue retirado de su trabajo, como lo establecen el artículo 26 de la ley 361 de 1997 y el Código Sustantivo del Trabajo.

5. Cancele el saldo adeudado hasta la fecha de viáticos y exámenes médicos no pagados por un valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (2.400.000). Saldo reconocido por los socios en el acuerdo del 23 de agosto del 2023.

6. Proceda a cancelar el saldo adeudado en el acuerdo de socios fechado el 23 de agosto del año 2023, por DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS. (2.200.000) saldo de incapacidades cumplidas y no canceladas hasta la fecha.

7. Proceder a afiliarse a JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA, al Sistema de Seguridad Integral.

8. Procedan a pagar las incapacidades otorgadas y no canceladas del 16 de julio por un término de 30 días y la incapacidad del 16 de agosto 2023 por 30 días.

9. Efectuar el pago de las cotizaciones de salud, pensión y riesgos laborales dejados de pagar, incluyendo el pago de cotizaciones atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado.

## **MATERIAL PROBATORIO RELEVANTE PARA EL CASO**

El actor anexó como pruebas de especial trascendencia:

1. Fotocopia de la cedula de ciudadanía de JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA.
2. Contrato de transacción fechado el dieciocho (18) días del mes de octubre del año 2023.
3. Acuerdo entre socios fechado el 23 de agosto del año 2023.
4. Certificado de matrícula mercantil con representación legal de San Luquitas Gold SAS.
5. Control seguimiento con Neurología y radio neurocirugía, MARIO I. BUENO DURAN, fechada el 23/09/ 2023.
6. Resumen Historia electrónica Hospital San Antonio de Padua de Simiti Bolívar, desde el 22 de febrero hasta el 23 de febrero del año 2023.
7. Historia Clínica y epicrisis de especialistas SANAIS VITAIS S.A.S. fechado el 23 de febrero de 2023.
8. Historia clínica Nicolás Prada, clínica de columna. Fechado el 02/10/2023.
9. Incapacidades otorgadas desde el 25 de febrero hasta 15 de julio del 2023.
10. Informe final de fisioterapia Clínica de espalda, Centro de Alta Tecnología SAS, expedido por la galena CLAUDIA GONZALEZ CARRILLO el día 23/10/2023.
11. Orden medica de Fisioterapia de 20 sesiones, asignada el día 20/09/2023. Por el galeno MARIO IGNACIO BUENO DURAN.
12. Informe de 10 sesiones de las 20 terapias expedido el 23/10/2023.
13. Exámenes RMN en Escenografía S.A. fechados el 03 de abril, 18 de abril, 17 de junio y 15 de septiembre del año 2023.
14. Incapacidad del 16 de julio 2023.
15. Incapacidad del 16 de agosto 2023.
16. Soportes de Exámenes y viáticos que le adeudan a Juan Daniel.

17. Documento firmado por Juan Daniel Villabona fechado el 21/02/2023.
18. Documental firmado por la esposa de Juan Daniel Villabona la señora DARLY YULIANA ALARCON RINCON, ante la clínica regional de especialistas SINAIS VITAIS. Fechada el 20/02/2023.
19. SOAT de la motocicleta, expedido por seguro la previsorora.
20. Certificación medica de accidente de tránsito (SIRAS).
21. Recibos de caja menor entregados a JUAN DANIEL VILLABONA cancelando incapacidades.
22. Autorización y recibo del CORSET TLSO KNIGHT TYLOR. Fechado el 21 de abril del 2023.
23. Consignaciones al padre de Juan Daniel Villabona
24. Recibos de los gastos ocasionados para medicamentos y viáticos.
25. Declaración juramentada extrajuicio.
26. Registro civil de nacimiento de L.A.V.A., de un (01) año de edad.
27. Registro civil de nacimiento de D.F.V.B, de seis (06) años de edad.
28. Registro civil de nacimiento de la hija de crianza, S.A.H.A. de cuatro (04) años de edad.
29. Fotocopia de la cedula de ciudadanía de DARLY YULIANA ALARCON RINCON.

## **TRAMITE PROCESAL**

Es preciso indicar que la acción de tutela fue remitida por competencia el día 05 de diciembre de 2023 y admitida el 06 de diciembre de 2023 providencia mediante la cual se ordenó la notificación del extremo pasivo y la vinculación de NELSON ROCHA RAMOS, MINISTERIO DE TRABAJO, LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, CRISTIAN ADRIAN PEREZ SANABRIA, YEILY VANESSA AREVALO CASTILLO, EDINSON OLARTE y NUEVA EPS S.A.

Consta en el expediente que se notificaron por correo electrónico: MINISTERIO DEL TRABAJO, LA PREVISORA S.A., NUEVA EPS S.A. y al accionado SAN LUQUITAS GOLD S.A.S.

Finalmente, reposa constancia de la publicación en AVISO de la tutela y el auto admisorio para lograr la comparecencia de los señores NELSON ROCHA RAMOS, CRISTIAN ADRIAN PEREZ SANABRIA, YEILY VANESSA AREVALO CASTILLO y EDINSON OLARTE, vinculados al presente tramite tutelar.

Se concedió a los accionados y vinculados el término de tres días hábiles para que se pronunciaran sobre los hechos materia de tutela, careciendo de contestación la empresa accionada SAN LUQUITAS GOLD S.A.S.

## **INFORMES RENDIDOS**

### **I. CONTESTACION NUEVA EPS S.A. –VINCULADA-**

Mediante escrito allegado el 11 de diciembre de 2023 la aseguradora indicó que el estado de afiliación el señor JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA es suspendido en el SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, y que como quiera que la acción de tutela va dirigida contra la empresa SAN LUQUITA GOLD S.A.S. se debe desvincular a NUEVA EPS del trámite constitucional.

## **II. CONTESTACION MINISTERIO DE TRABAJO –VINCULADO-**

Mediante escrito radicado el 13 de diciembre de 2023 indica que se debe desvincular a dicha entidad por configurarse la falta de legitimación pasiva, sin embargo, considera pertinente señalar que el accionante cuenta con otros mecanismos ordinarios para la protección de sus derechos, contenidos en el código procesal del trabajo y ofrecidos por la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social.

### **PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO**

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas que rigen el presente asunto, procederá este despacho a determinar si la acción de tutela es procedente para ordenar el reintegro del señor JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA, al cargo que presuntamente desempeñaba en la empresa SAN LUQUITAS GOLD SAS., y en consecuencia, el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. De ser procedente, esta judicatura establecerá si la sociedad accionada vulnera los derechos fundamentales alegados por el accionante.

### **CONSIDERACIONES**

**I. COMPETENCIA:** El Juzgado es competente para conocer en primera instancia de la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2594 de 1991.

### **II. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL**

La acción de tutela se constituye en un mecanismo excepcional y subsidiario consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia para la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas, siempre que se vulneren o amenacen por la acción u omisión de una autoridad pública o por los particulares en los casos expresamente señalados por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela es procedente frente a los particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte o grave directamente el interés colectivo, o respecto de quien el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

### **REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA**

Al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o Idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad).

#### **Legitimación en la causa por activa.**

El artículo 86 de la Constitución establece que toda persona que considerare que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran amenazados, podrá

interponer acción de tutela ante los jueces en nombre propio o a través de un representante que actué en su nombre, para procurar la protección inmediata.

En el caso objeto de estudio, aduce el señor JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA, que la empresa SAN LUQUITAS GOLD S.A.S., vulnera sus derechos constitucionales a la vida, mínimo vital, seguridad social y estabilidad laboral reforzada, tras haberle finalizado su contrato verbal de trabajo sin justa causa, pese a encontrarse en incapacidad médica producto del accidente acontecido. De manera que al ser el titular de los derechos que pretende, se encuentra acreditada la legitimación por activa.

### **Legitimación en la causa por pasiva.**

Este requisito de procedibilidad hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado y ser el llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental.

El artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que vulneren o puedan vulnerar los derechos fundamentales. También procede contra acciones u omisiones de particulares; en este último evento, debido a que en sus relaciones jurídicas y sociales pueden presentarse asimetrías que generan el ejercicio de poder de unas personas sobre otras.

La acción de tutela está dirigida en contra de SAN LUQUITAS GOLD S.A.S., se aprecia que la accionada no rindió el informe requerido por este despacho, sin embargo, del material probatorio que reposa en el expediente, consta que era la empleadora del accionante y respecto del cual se encontraba en situación de subordinación, derivada de su condición de trabajador, de manera que está legitimada en la causa por pasiva.

### **Inmediatez.**

Este requisito creado por la jurisprudencia constitucional para asegurar la efectividad y la pertinencia de la interposición de la acción de tutela se concibe como un límite temporal para presentar la acción de amparo. Ello implica que deba presentarse dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, ya que su naturaleza es la protección inmediata y urgente de los derechos fundamentales. Este presupuesto exige del juez que se constate si el tiempo transcurrido entre la supuesta violación o amenaza y la presentación de la tutela sea razonable, o no siendo razonable el accionante exponga los motivos de la demora. Este requisito de procedencia no es la imposición de un término de caducidad, sino que, dada la esencia de la acción prevista para la protección inminente de derechos fundamentales perdería sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto vulneratorio.

El actor aduce que finalizó el vínculo laboral entre ella y las accionadas el 10 de marzo de 2023, hecho a partir de la cual, afirma se produce el menoscabo de sus derechos, e instaura la acción de tutela el 05 de diciembre de 2023 habiendo entonces, transcurrido nueve meses 05 días desde una fecha a la otra, pese a ello, considera este operador judicial que se cumple el término de inmediatez en tanto que el accionante acreditó la prolongación de las incapacidades otorgadas por el médico tratante, lo cual impedían sin lugar a dudas que iniciara el trámite tutelar en un término inferior. Así las cosas, se encuentra acreditado el requisito de la Inmediatez.



## **Subsidiariedad.**

El principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para hacer cesar la vulneración a los derechos fundamentales, o en caso de que exista otro mecanismo, aquel no sea idóneo o eficaz para garantizarlos, o porque se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

En tratándose de acciones de tutela tendientes a obtener el reintegro laboral de una persona que alega encontrarse en estabilidad laboral reforzada, el estudio del requisito de subsidiariedad adquiere gran importancia, por cuanto existe el proceso ordinario laboral regulado en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), el cual es, por regla general, el medio judicial preferente, idóneo y eficaz para garantizar el derecho fundamental a la seguridad social y la estabilidad laboral reforzada de personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud.

Dicho procedimiento, es idóneo, porque el artículo 48 del CPTSS dispone que el proceso está diseñado para que el juez adopte *“las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales”*. Al respecto, la Corte Constitucional, ha sostenido que, en el marco de dicho proceso, los trabajadores que se encuentran en estado de debilidad manifiesta por deterioro de salud pueden controvertir *“la legalidad de la terminación del vínculo laboral”*, solicitar el reintegro a sus puestos de trabajo y pedir el pago de las prestaciones asistenciales y económicas dejadas de percibir.

Así mismo, ha indicado que este procedimiento es eficaz en abstracto pues la normativa que regula contiene un procedimiento expedito para su resolución y otorga al juez la facultad de decretar medidas cautelares que considere pertinentes para proteger de forma oportuna los derechos fundamentales.

A pesar de lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para proteger el derecho a la seguridad social y la estabilidad laboral reforzada de personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud, cuando se acredite la existencia de un riesgo de perjuicio irremediable, el cual se configura en estos casos si el accionante se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica que no le permite *“garantizar su subsistencia y, a su vez esperar a la resolución de fondo de su exigencia ante la jurisdicción ordinaria laboral”*.

Ha dicho la Corte, que lo anterior ocurre, entre otras, cuando se demuestra que el accionante este (i) desempleado, (ii) no tiene ingresos suficientes para *“garantizar por sí mismo sus condiciones básicas y dignas de existencia”* y soportar el sostenimiento de su núcleo familiar, (iii) no esté en capacidad de asumir los gastos médicos que su situación de salud comporta, (iv) se encuentra en *“condición de pobreza”* y (v) no cuenta con una red de apoyo familiar que pueda asistirlo mientras se tramita el proceso ordinario.

En conclusión, por regla general las controversias relacionadas con el reintegro de un trabajador deben ser dirimidas en la jurisdicción ordinaria laboral. Sin embargo, el examen de subsidiaridad debe ser menos estricto cuando se encuentran comprometidos los derechos de sujetos de especial protección constitucional, como las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por sus condiciones de salud y cuando la desvinculación laboral amenaza seriamente el mínimo vital del trabajador y de su familia.

El accionante en el hecho trigésimo tercero señala lo siguiente: *“JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA, no cuenta con vivienda propia, ni tampoco reside en vivienda familiar, por lo tanto, paga arriendo. No tiene una profesión definida, adicional a desempeñarse como ayudante frentero, no realiza ninguna otra actividad, por lo tanto, no le genera ningún otro ingreso suficiente para el sostenimiento. Vive en unión libre, es progenitor de (02) hijos menores de edad, que dependen exclusivamente de él, además depende económicamente de él su compañera sentimental DARLY YULIANA ALARCON RINCON identificada con la cedula de ciudadanía número 1.002.279.039, quien no recibe salario ni pensión alguna, tampoco posee propiedades, y es madre de una niña de cuatro (04) años de edad, quien también depende exclusivamente del señor VILLABONA BECERRA pues es su padre de crianza.”*

Para acreditar las anteriores circunstancias el accionante arrió declaración extrajudicial rendida por su compañera permanente en la cual se hace constar que ella y sus hijos menores dependen exclusivamente del señor JUAN DANIEL VILLABONA, de igual manera, se constató en consulta con el sistema ADRES que tanto el señor VILLABONA como su compañera permanente se encuentran registrados en estado ACTIVO en el régimen subsidiado, de lo cual se colige que ninguno de ellos cuenta con empleo permanente; sin embargo, se echa de menos prueba sumaria de la afectación directa que presuntamente le generó la terminación del vínculo laboral con el hoy accionado, se desconocen por ejemplo, los gastos correspondientes a la afectación del mínimo vital y móvil de su núcleo familiar.

Por otra parte, se tiene que, en el caso sub examine, el actor pretende que se desconozca, el acuerdo de transacción suscrito entre este y la empresa SAN LUQUITAS GOLD S.A.S., puesto que fue presuntamente inducido por el empleador.

Frente a lo anterior, es preciso indicar que la configuración de un presunto despido discriminatorio, no autorizado, así como el debate por un presunto vicio en el consentimiento, plantea una controversia frente a la cual el proceso ordinario laboral es el medio judicial idóneo y eficaz, en la medida es dentro de aquél, donde el accionante podrá presentar los medios de convicción probatoria necesarios para demostrar que reúne las condiciones establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-005 de 2017 para que se le reconozca la garantía de estabilidad laboral reforzada extendida, acreditar la ilegalidad de su desvinculación laboral, acreditar el cumplimiento de lo establecido en la ley 2141 de 2021 y, de ser así, obtener el pretendido reintegro.

Para ello, se hace necesario el procedimiento establecido por el legislador, en el que se tenga acceso a un caudal probatorio abundante y el agotamiento de todas las etapas propias de un juicio.

En síntesis, resulta claro que el actor no logró acreditar con suficiencia los supuestos fácticos mínimos establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional para lograr la procedencia de la acción de tutela establecidas para casos similares, es así como no aportó prueba de la afectación directa que presuntamente le generó la terminación del vínculo laboral con el hoy accionado."

Así las cosas, ante la existencia de un mecanismo de defensa judicial, como lo es el Proceso Ordinario Laboral, el cual en este caso es idóneo para lograr proteger los derechos fundamentales que eventualmente podrían estar en juego, la presente acción de tutela se torna improcedente al no encontrarse satisfecho el requisito de subsidiariedad, por lo que no entrará esta célula judicial al estudio de fondo.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA** instaurada por el señor JUAN DANIEL VILLABONA BECERRA a través de apoderado judicial en contra de SAN LUQUITAS GOLD S.A.S., de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

**SEGUNDO: NOTIFÍQUESE** a todos los intervinientes por el medio más expedito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**TERCERO:** En el evento de no ser objeto de impugnación esta providencia, remítase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dejándose las correspondientes constancias.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**ORLANDO VANEGAS CABALLERO**  
**JUEZ**

Firmado Por:  
Orlando Vanegas Caballero  
Juez Municipal

**Juzgado Municipal**  
**Juzgado 001 Promiscuo Municipal**  
**Santa Rosa Del Sur - Bolivar**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b9226c18fe7c157843d73afe6613e03696054a80e4bab625bb6592a6eedb67d8**

Documento generado en 11/01/2024 02:47:16 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**